



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO
Demandados: COLPENSIONES y PORVENIR S. A.
Radicado: 05001 31 05 014 2020 00361 01
Sentencia: S-007

AUTO:

En atención a la Escritura Pública No. 1326 del 11 de mayo de 2022 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la AFP PORVENIR S. A. a la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S. A. S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. JULIANA ARAQUE QUIROZ, con T. P. No. 293.693 del C. S. de la J.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la AFP PORVENIR S. A. y por COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 07 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO demandó a PORVENIR S. A. y a COLPENSIONES, pretendiendo lo siguiente:

“DECLARACIONES PRINCIPALES

PRIMERO: Se DECLARE LA NULIDAD O INEFICACIA del Traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR del señor CESAR AUGUSTO MENDEZ, acto jurídico que carece de validez por existir vicio en el consentimiento, en razón de la omisión del deber información y el no cumplimiento de las obligaciones que taxativamente le señalan los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994.

SEGUNDO: Se declare válida y sin solución de continuidad la afiliación del señor CESAR AUGUSTO MÉNDEZ al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, hoy administrado por COLPENSIONES.

TERCERO: Que se declare que la AFP PORVENIR, está obligada a devolver los aportes realizados por éste, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES. Sin cobros por administración.

DECLARACIONES DE CONDENA:

PRIMERA: Que se condene a la AFP PORVENIR, a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, todos y cada uno de los aportes que el poderdante efectuó al régimen de ahorro individual, incluidos los rendimientos y sin ningún descuento por cuota de administración.

SEGUNDA: Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a tener como válida y continua la afiliación del señor CESAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO, al régimen de prima media con prestación definida, hoy administrado por la citada entidad.

TERCERA: Que se condene a las entidades demandadas a lo que ultra y extra petita, resulte debatido y probado en el transcurso del proceso.

CUARTA: Que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas procesales y agencias en derecho que decrete el juez.

LOS HECHOS:

Expone el demandante como fundamento de sus peticiones, que nació el 11 de julio de 1956. Que inició sus cotizaciones en el Sistema General de Pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el mes de abril del año 1978 y hasta el mes de junio de 2000. Que a partir del año 2000 se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de PORVENIR S. A., entidad en la que se encuentra afiliado en la actualidad. Indica además que para el momento en que se efectuó el traslado no obtuvo por parte del fondo de pensiones una suficiente información sobre las condiciones de su pensión de vejez, ni se tuvieron en consideración sus condiciones particulares. Que una buena asesoría le hubiera permitido evidenciar que lo más conveniente para él era permanecer en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y no haberse trasladado al de Ahorro Individual con Solidaridad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES indica que no le constan los hechos planteados en la demanda por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones de carga dinámica de la prueba - particularidades del caso, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, prescripción, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la de compensación.

PORVENIR S. A. indica igualmente que no le constan los hechos planteados en la demanda, o no son ciertos en la forma como están planteados por la parte actora, sin embargo, afirma que el traslado de régimen del demandante se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la época, y que además se efectuó la debida asesoría, resaltando el hecho de que en tal asesoría se le brindó al actor información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de afiliación. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que tal acto goza de plena validez y en su defensa propuso las excepciones de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y la de buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 07 de julio de 2022, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

"PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación del señor CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO, identificada con C.C. 3.051.961, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A.

SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, el valor de los dineros hallados en la cuenta de ahorro individual del señor CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO, incluyendo para el efecto los rendimientos financieros y las comisiones de administración, que incluyen lo pagado por concepto del seguro previsional y garantía de la pensión mínima a partir del 01 de julio de 2000.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, que reactive la afiliación del señor MÉNDEZ FORERO al régimen de prima medida con prestación definida, sin solución de continuidad.

CUARTO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A., que comuniquen, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la decisión de la sentencia a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, para los efectos legales correspondientes.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas.

SEXTO: COSTAS del proceso a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, para cuya liquidación se fija \$2.000.000 a título de agencias en derecho. Se ABSUELVE a COLPENSIONES de la condena en COSTAS".

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PORVENIR S. A. interpuso recurso de apelación en forma total, indicando al respecto que al momento en que el demandante suscribió el formulario de afiliación ante PORVENIR S. A., el mismo se hizo en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la época, y que además se efectuó la debida asesoría, resaltando el hecho de que en esa oportunidad se le brindó a la actora información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de afiliación, las diferencias que existen entre uno y otro régimen. Que adicionalmente se debe destacar que, conforme al interrogatorio de parte, él mismo reconoce que si recibió asesoría por parte de un asesor comercial de Porvenir S. A. y allí tuvo la oportunidad de obtener la información necesaria, suficiente y veraz, y que decidió trasladarse. Por lo anterior solicita que se reconsidere la postura del Despacho en lo que tiene que ver con la declaración de Ineficacia del traslado del demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual y sea revocada tal decisión. Que no obstante lo anterior, y si en gracia de discusión el Tribunal considera que debe dejar en firme la decisión de ineficacia de traslado, solicita se reconsidere lo atinente al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para ello que las comisiones de administración fueron descontadas bajo el imperio de

la normatividad y destinados conforme a lo allí establecido para seguros previsionales y fondos de pensiones de garantía mínima, lo que se hizo conforme al mandato de la norma y que de devolver tales dineros se estaría desconociendo la administración que realizó el fondo respecto de los aportes de afiliado. Solicita sea revocada la sentencia de primera instancia en su totalidad, y que en su lugar no salgan avante las pretensiones del demandante y tampoco las costas del proceso.

COLPENSIONES hizo lo propio interponiendo recurso de manera parcial frente a la orden del traslado de los dineros de la cuenta individual del demandante, por cuanto si bien ordenó la devolución de tales dineros conforme lo ha indicado la jurisprudencia, lo cierto es que no lo hizo de manera indexada, por lo que solicita que tales sumas de dinero sean indexadas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de PORVENIR S. A. presentó escrito de alegatos de conclusión, solicitando se revoque la sentencia emitida el 07 de julio de 2022 por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en lo que tiene que ver con la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la parte actora al RAIS, y la condena a reintegrar a Colpensiones el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto los rendimientos que se hubieren causado, las comisiones de administración que incluyen lo pagado por seguro previsional y lo pagado para pensión mínima, para que en su lugar se absuelva al fondo de estas condenas. Igualmente solicitó que se absuelva a la demandada de la condena en costas impuesta en dicha sentencia.

COLPENSIONES por su lado solicitó que conforme a las consideraciones expuestas en su escrito de alegatos de conclusión que

se sirva analizar nuevamente el asunto y emita las decisiones del caso.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S. A y por COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* El señor CÉSAR AUGUSTO MÉNDEZ FORERO nació el 11 de julio de 1956; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí, a partir del mes de abril de 1978; y *iii)* en el mes de junio del año 2000 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la PORVENIR S. A., entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al

afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008,

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 09 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;

- ii)* El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- iii)* Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- iv)* No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su afiliación al Régimen de Ahorro Individual a través de PORVENIR S. A., indicó que este evento coincidió con su vinculación a la Fiscalía General de la Nación en el año 2000, que en dicha oportunidad le dijeron cosas muy bonitas pero que después no se cumplieron, que le hablaron que la mesada pensional que obtendría en dicho régimen sería como mínimo la que iba a obtener en el ISS, que por eso les creyó y por ello procedió con el traslado de régimen. Que se sintió motivado por las

características que le ofrecieron, especialmente por la posibilidad de retirar los aportes, pero que ello no ocurrió pese a que intentó en alguna oportunidad retirar dichos aportes. Que no ha obtenido proyección de la mesada pensional que le permita tomar la decisión de permanecer en Porvenir S. A., pero si sabe que en Colpensiones la mesada pensional si puede ser más beneficiosa en el Fondo Público administrado en la actualidad por Colpensiones.

De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la

devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada, sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Indexación de los conceptos a devolver.

Advirtiéndole que la orden a PORVENIR S. A. de trasladar los conceptos referidos en la sentencia de primera instancia anteriormente mencionados, deben incluir la respectiva indexación, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según fue solicitado por COLPENSIONES no solo al momento de presentar el recurso de apelación, sino también con la contestación a la demanda, y en los alegatos de conclusión, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, Rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

En consecuencia, en este puntual aspecto se adicionará la decisión adoptada en primera instancia.

Condena en costas en contra de PORVENIR S. A.

Finalmente, otro tema que cuestiona la apoderada de PORVENIR S. A. al momento de interponer el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea el apoderado, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR S. A. presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas que no habían razones para declarar la ineficacia o nulidad del traslado del actor entre regímenes, que la administradora de pensiones cumplió con la obligación de dar información al demandante en los términos y condiciones en que esa obligación estaba establecida para la fecha del traslado de régimen pensional, que el demandante estaba en

capacidad legal para decidir acerca del traslado del régimen, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S. A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 07 de julio de 2022, pero la **ADICIONA** en el sentido de advertir que los conceptos a trasladar por parte de la administradora del fondo privado referidos en la sentencia de primera instancia, deben incluir la respectiva indexación.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **38e5f45563c403b935a98bed92152281abfe11dc38d2a981d8a89da9cdf972d4**

Documento generado en 26/01/2023 01:12:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>